

LAS VIRTUDES ECOLÓGICAS Y LA POLÍTICA DE LA AUSTERIDAD

Fernando Arribas Herguedas*

Comprometido ya desde su mismo título con una recuperación moral de la política, el libro de Joaquim Sempere *Mejor con menos* representa un pensamiento que continúa subrayando la incapacidad de las soluciones tecnológicas para afrontar los problemas ecológicos que se avecinan. El autor catalán mantiene que resulta urgente reformular la concepción vigente de la riqueza, transformar en profundidad el modelo de producción y consumo imperante en los países industrializados y hacer otro tanto con nuestro estilo de vida y nuestras aspiraciones vitales. Con tal fin, emprende una contundente e incontestable crítica del sistema de necesidades dominante en las sociedades industrializadas, censurando el desdén mostrado por la ciencia económica convencional hacia todo lo concerniente a las determinaciones sociales y culturales que influyen en las motivaciones del consumidor, su injustificado rechazo del concepto de necesidad en beneficio del término «preferencia» y el solipsismo sustentado por la angosta antropología del *Homo oeconomicus*. Es indudable que Sempere desgrana con clarividencia y rotundidad estas y otras cuestiones, poniendo de relieve la sepultada dimensión política de los procesos de producción y consumo propios del capitalismo global de nuestro tiempo.

Cabe resaltar la atinada y necesaria crítica de la ilusoria creencia en la «soberanía del consumidor». Los manuales de microeconomía al uso continúan equiparando este principio a la libertad de elección de los individuos entre diferentes alternativas y lo contemplan como un postulado básico de las nociones liberales de libertad y autonomía.¹ De ello deducen, a su vez, que la

motivación de los consumidores a la hora de tomar sus decisiones no es una cuestión que incumba a la ciencia económica, que solamente habría de atender a sus «preferencias dadas» o «reveladas» durante el proceso económico propiamente dicho. Sin embargo, el principio de la «soberanía del consumidor», en un sentido más estricto, no tiene que ver con la libre elección de los individuos sino que más bien vendría a afirmar que éstos, al decidirse por una opción de compra en el contexto de un sistema de mercado libre, estarían determinando de forma impersonal qué, cómo y cuántos bienes habrán de producir las empresas.² Obviamente, no es lo mismo elegir «libremente» entre opciones prefijadas por algún otro agente que condicionar con nuestra elección la naturaleza y el número de esas opciones. En efecto, si atendemos a este significado más preciso comprobaremos que en los sistemas económicos capitalistas los individuos no influyen realmente en lo que se produce ni en cómo se produce. Tal vez por esta razón la ciencia económica convencional continúa remitiendo a una esfera puramente subjetiva los conceptos de «lo necesario» y «lo deseable», sin admitir que sea posible articular una teoría objetiva de las necesidades humanas.

Así pues, sería cierto que en el sistema de mercado «realmente existente» los individuos poseemos libertad de elección entre diferentes opciones de consumo, pero no hay que perder de vista que tales opciones vienen en gran medida *impuestas* desde la esfera de la producción, les guste o no reconocerlo a los economistas liberales. Bajo el capitalismo contemporáneo la demanda no es *anterior* a la oferta. Debido a ello,

nos recuerda Sempere, nuestro sistema de necesidades ha venido a sustentarse en la producción deliberada y consciente del «consumidor insatisfecho», víctima de fenómenos como la «sobreadquisición» o la «obsolescencia provocada»³ que nos involucran en una espiral de incesante crecimiento de nefastas consecuencias para el metabolismo sacionatural. Se da así la paradoja de que creemos elegir libremente mas, en realidad, las alternativas de que disponemos han sido trazadas con el fin de que ininterrumpidamente estemos escogiendo entre nuevas opciones de consumo —en definitiva, con el objetivo de que sigamos consumiendo sin parar. Como afirmaba Scitovsky, el enfoque dominante en la ciencia económica «pasa por alto la posibilidad de que las mismas influencias que modifican nuestros gustos modifiquen igualmente nuestra capacidad para obtener satisfacción de las cosas que correspondan a nuestros gustos».⁴ El problema es que con ello, como acertadamente señala Sempere, tiene lugar una deliberada reducción del individuo al papel de mero consumidor, quedando anulada su capacidad para decidir acerca del metabolismo sacionatural, es decir, respecto de la relación entre la sociedad y el medio en el que vive.⁵

Es evidente que sin esa creciente espiral consumista el capitalismo contemporáneo tiende al colapso. Pero el problema es que a su vez esa misma espiral que da vida al sistema económico conduce al colapso del metabolismo sacionatural. Este dilema ha sido certeramente reflejado por El Roto en una de sus incisivas viñetas, en la que un personaje que daba la espalda al lector meditaba en voz alta: «Si se acelera el consumo, nos comeremos el planeta, y si se frena en seco nos comeremos unos a otros».⁶ Los niveles elevados de consumo son imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema económico, por lo que éste ha generado potentes mecanismos psicosociales

de propaganda aunque con ello socave las bases físicas en las que se sustenta. El gran capital se convierte así, nos dice Sempere, en «acondicionador de la moral colectiva» cuyo objetivo prioritario no es ya la satisfacción de deseos y necesidades sino la «autorreproducción ampliada del capital».⁷ Esta dinámica expansiva, por otra parte, sólo puede mantenerse gracias a la generalizada convicción de que el principio que realmente funciona en el sistema es la soberanía del consumidor, lo que significa que se ha producido una suerte de inversión ideológica en el seno de las sociedades contemporáneas sustentada por la fuerza de la propaganda con graves consecuencias para el planeta y, habría que añadir, para la propia libertad individual.

Sempere nos dice así acertadamente que «el consumidor responsable debe asumir que *el consumo es político*» y que el engaño auspiciado por el dogma de la soberanía del consumidor no hace sino ocultar esa dimensión política. Propone, en este sentido, una exigencia del «derecho cívico a intervenir en las dimensiones esenciales del metabolismo sacionatural» con el fin «de convertir al mero consumidor en *consumidor-ciudadano*».⁸ El horizonte político del impulso transformador ha de ser un modelo deliberativo de democracia que quizá, como vamos a ver, no sopesa en su justa medida las dificultades que conlleva desafiar no sólo un fundamento epistemológico de la ciencia económica convencional —la mencionada soberanía del consumidor— sino algo que es, asimismo, un elemento clave de la cultura política contemporánea: el individualismo ético.

El problema al que me refiero no es privativo del libro que nos ocupa, sino que afecta a buena parte del pensamiento verde contemporáneo, por lo que tal vez sería injusto reprochar a Sempere que no aporte una reflexión teórica más amplia sobre el particular. Pero lo cierto es que aunque el

autor subraya la dimensión política del consumismo contemporáneo posteriormente ofrece una propuesta de transformación excesivamente difusa. Sempere trata de convencernos de que debemos optar por estilos de vida más frugales y nos muestra cómo el sistema económico nos conduce por cauces que facilitan su autorreproducción. Con tales argumentos apunta hacia la necesidad de que las sociedades contemporáneas impulsen políticas que promuevan tales estilos de vida y los valores que subyacen a ellos si no queremos enfrentarnos a un colapso ecológico. Pero, a mi entender, la falta de una mayor concreción respecto a la naturaleza de las transformaciones institucionales que los regímenes de democracia liberal habrán de afrontar, así como la ausencia de un análisis de las implicaciones para valores fundamentales como la libertad, la igualdad, los derechos individuales (entre ellos, el derecho de propiedad, quizá el más afectado por las medidas de emergencia que se aventuran), y la vaguedad de la concepción de la futura sociedad sostenible propuesta por Sempere (el denominado «socialismo de la suficiencia»), hacen que el libro deje abiertos demasiados interrogantes. A través de las páginas de *Mejor con menos* podemos entrever, como ya he dicho, una propuesta moral e incluso *moralizante* que exhorta al individuo para que perciba su posición subordinada en el proceso económico y las consecuencias ecológicas que ello comporta, con el fin de que transforme su estilo de vida, se habitúe a vivir con mayor austeridad y, además, adquiera conciencia política y se realice como ciudadano que aspira al autogobierno. En este sentido, podríamos interpretar la propuesta de Sempere como *perfeccionista* en el plano moral,⁹ *participativa* en su dimensión política y, al mismo tiempo, *planificadora* en lo que se refiere a la organización de la producción económica.¹⁰ Estos tres rasgos presentan diferentes

problemas que examinaré con más detalle a continuación.

En primer lugar, la propuesta política de Sempere es perfeccionista en la medida en que la autoridad política tendría como uno de sus fines la promoción de una determinada forma de vida buena y la desincentivación de las pautas consumistas en nombre de una concepción del interés colectivo. Una política perfeccionista de esta clase debería establecer de qué forma la autoridad fomentará las virtudes ecológicas que los ciudadanos habrán de abrazar en la futura sociedad sostenible, en qué grado tales virtudes serán compatibles con los derechos individuales recogidos en los textos constitucionales de los regímenes de democracia liberal y cuál habrá de ser el papel del Estado y el alcance de su intervención en la esfera económica. Es decir, la concepción perfeccionista de la política determinará en gran parte qué modelo de democracia se adoptará y en qué consistirá la planificación económica. Pero la ausencia de un análisis más pormenorizado de estas cuestiones hace que las tesis de Sempere corran el riesgo de interpretarse como una doctrina comunitarista en la que el papel de los «expertos» podría no ceñirse al de simples asesores gubernamentales sino extenderse hasta llegar a convertirse en sacerdotes saintsimonianos. En las sociedades plurales es imprescindible aclarar por qué una ética ecológica basada en la suficiencia y los principios políticos que se derivarían de ella no incurrirán en los mismos vicios que otras doctrinas perfeccionistas que basan el contenido de las leyes en lo que Rawls denominó «doctrinas plenamente comprensivas».¹¹ Esto es aún más necesario si tenemos en cuenta que una buena parte de las ideas verdes, por ejemplo las defendidas por posiciones esencialistas como la ecología profunda o la ética de la tierra, se han enfrentado a estos problemas con escasa fortuna.

Las doctrinas perfeccionistas son incompatibles además con la aspiración del liberalismo contemporáneo a la neutralidad valorativa del poder político respecto de las diferentes concepciones del bien que los individuos puedan suscribir. Con independencia de que este ideal de neutralidad sea considerado viable o deseable por parte de Sempere, es imprescindible analizar cómo se definirían la libertad de elección y los derechos individuales (especialmente, el derecho de propiedad) bajo el socialismo de la suficiencia, teniendo en cuenta el pluralismo valorativo que caracteriza a las sociedades democráticas contemporáneas. La demostración fehaciente de que el capitalismo globalizado ejerce una forma sutil de heterodirección de los fines y los medios a través de la fiebre consumista y la propaganda no legítima de suyo un perfeccionismo ecológico. A lo sumo, y no es poco, sirve para mostrar la grave fractura que a día de hoy existe entre el «capitalismo real» y algunos de los valores fundamentales que la propia filosofía política liberal dice defender y que distan enormemente de cumplirse en un sistema de mercado globalizado. Pero, insisto, para sustentar una propuesta política basada en la promoción de virtudes ecológicas hace falta algo más: es necesario aclarar de qué modo semejante promoción afectará a las libertades individuales básicas y al ideal de neutralidad.

En segundo lugar, Sempere contempla su propuesta como un proyecto en el que la transformación moral del individuo y el consiguiente tránsito hacia la austeridad voluntaria vendrá propiciado por el juego político de la deliberación democrática. Cabe suponer que los ciudadanos abrazarán autónomamente la concepción perfeccionista del bien inherente a las virtudes ecológicas tras haber adquirido hábitos de participación política mediante la deliberación y que eso no afectará al pluralismo en otros aspectos de la cultura. Pero aquí tam-

bién parece necesario dedicar espacio a otras cuestiones fundamentales. Así, habría que argumentar por qué los fines ecológicos se verán favorecidos en el proceso de deliberación democrática en mayor medida que a través de otros cauces —por ejemplo, mediante un gobierno autoritario de expertos. La apuesta del pensamiento verde por la democracia deliberativa se basa en el hecho de que los fines ecológicos tienen que ver con el interés o el bienestar colectivo (es decir, atañen a la esfera de lo propiamente común, no a la simple agregación de la utilidad individual) y los intereses comunes emergen y se forman a través de procesos de deliberación en los que las preferencias individuales se moldean, cuestionan y transforman a la luz de razones que puedan ser aceptadas por todos.¹² Supuestamente, mediante los procesos de deliberación los individuos adquieren un estatus moral más ecológico, menos enfocado al mero interés individual y más comprometido con el bien común. Pero podría suceder que el proceso de deliberación no proporcionara los resultados esperados. Podría darse el caso de que la imprescindible «autorregulación de las necesidades» no surgiera autónomamente, es decir, que la ciudadanía ecológica no emergiera de abajo hacia arriba para ejercer una presión sobre el poder político y reclamar a su vez más participación en el proceso democrático. En otros términos, parece dudoso que una asamblea deliberativa de consumidores compulsivos y atomizados vaya a dar lugar a un compromiso con el interés común o a una concepción de este que vaya más allá de la creación de condiciones aún más favorables para el consumo desmedido. Como reconoce el propio Sempere, la potencia propagandista del aparato productivo maneja los recursos psicosociales para perpetuar la adicción al consumo y sin una acción colectiva y política complementaria al esfuerzo individual la autorregulación de las

necesidades resultará imposible. Consciente de las dificultades para la aparición de ese sujeto colectivo, plantea el difícil dilema al que se enfrenta el pensamiento verde: la alternativa a «una frugalidad consentida y organizada [...] probablemente sea una austeridad forzada».¹³ La única vía para alcanzar la primera, a juicio de Sempere, es la formación de una «voluntad colectiva»¹⁴ que emerge de la deliberación democrática y desincentiva las conductas insolidarias. No hay que olvidar que esa voluntad colectiva —trasunto de la voluntad general de Rousseau— habrá de estar legitimada para legislar no sólo en el ámbito de la demanda sino también en la esfera de la oferta, restringiendo fuertemente los usos de la propiedad y desincentivando a aquellos que no abracen la «frugalidad organizada». Y semejante legitimación se antoja complicada —y éste, repito, no es un problema que afecte sólo al trabajo de Sempere, sino a gran parte del pensamiento político verde— allí donde el ciudadano ha sido «habitado» ideológicamente, mediante la propaganda consumista que separa radicalmente la conducta económica de sus implicaciones políticas, a desentenderse por completo de sus obligaciones como ciudadano. De ahí que Sempere acabe apelando, un tanto desesperadamente, a las «mutaciones inesperadas» que se producirán en situaciones de grave colapso civilizatorio.¹⁵ Sempere debería enfrentarse, pues, al incómodo problema de cómo romper la circularidad del proceso de cambio: para alcanzar la ciudadanía ecológica y la frugalidad social es preciso extender previamente procedimientos de deliberación política, pero para materializar éstos es necesario, a su vez, que los ciudadanos los reclamen. Mas si la deliberación es la única forma de lograr que los individuos abandonen la idiocia moral inherente al consumismo y se conviertan en ciudadanos, ¿cómo podemos esperar que reclamen la participación política? ¿Por

dónde, pues, habría de romperse el círculo vicioso?

Llegamos así a la tercera cuestión, el problema de la planificación económica. El «socialismo de la suficiencia» sería la opción más razonable (quizá la única razonable) desde un punto de vista ecológico, pero en el libro no se perfila con claridad a qué clase de socialismo hemos de aspirar. La evolución hacia un régimen socialista a escala planetaria se antoja difícil no sólo por la experiencia histórica de los regímenes de «socialismo real», sino porque además habría que argumentar por qué es deseable luchar por una utopía socialista y por qué los fines del socialismo coinciden con los objetivos de una sociedad ecológicamente sostenible. Tampoco está claro que los procedimientos de la democracia deliberativa vayan a conducir a un compromiso generalizado con el proyecto socialista. El problema es que, una vez más, estas cuestiones esenciales no son objeto de atención por parte de Sempere. El «socialismo de la suficiencia» aparece como la única alternativa a la «guerra de todos contra todos» producida tras una probable regresión al estado de naturaleza hobbesiano fruto de la presión sobre los recursos naturales ejercida por las sociedades humanas.¹⁶ Y el argumento principal para abrazar esa variante de socialismo suena, una vez más, un tanto desesperado. Así, afirma Sempere, «en un mundo de escasez el socialismo podría recuperar su atractivo, ya que la escasez se soporta peor si algunos tienen mucho».¹⁷ Al reducirse la «competencia posicional» como consecuencia de la escasez, los individuos se resignarían a poseer menos bienes en la medida en que nadie más los poseería o estaría en condiciones de hacerlo. Esto, obviamente, no es una razón poderosa para preferir el socialismo, pues tal como se plantea parece que el mayor problema no es la pobreza de los muchos sino la riqueza de los pocos. Resulta ser más bien un argumen-

to para *conformarse con* el socialismo en una situación límite, por lo demás susceptible de convertirse en presa fácil de esas tocas críticas ultraliberales que insisten en que el socialismo logra la igualdad a costa de empobrecer a todas las clases sociales. Sempere debería especificar, en este sentido, el papel de los derechos individuales y el alcance de la participación política a la hora de emprender el viaje hacia esa sociedad socialista en la que los ciudadanos, de forma autónoma, acordarían mutuamente rebajar sus aspiraciones vitales en lo referente al consumo privado (es decir ejerciendo *efectivamente* la soberanía del consumidor), establecerían pautas de planificación económica y ajustarían con ello la producción a las exigencias del «metabolismo socionatural». Resulta evidente que la mayor parte de las propuestas del libro precisan, como primer paso, de una formulación constitucional y por tanto de reformas legislativas profundas que exigirían un consenso mayoritario. Pero es evidente que los criterios de decisión habrían de obtener legitimidad no sólo a través del respaldo de la mayoría, sino buscando cierta coherencia con respecto a los valores fundamentales de las sociedades democráticas, sobre todo en lo concerniente a los derechos de propiedad. No queda claro, sin embargo, cuál es la concepción de la propiedad que subyace al socialismo de la suficiencia. Cabe la posibilidad de que el socialismo de la suficiencia sea concebido por Sempere como una alternativa política que no traspasaría los límites de los regímenes de democracia liberal; es decir, que no cuestionaría el derecho de propiedad como un derecho fundamental, ni el marco económico del sistema de mercado, ni la estructura del Estado de derecho contemporáneo, sino que plantearía solamente la necesidad de una redistribución más amplia de la riqueza y, con ella, una reformulación progresiva de los usos de la propiedad, aunque creo que ésta no es

la opción que el autor tiene en mente. Bajo este supuesto, la garantía de que la deliberación democrática proporcionaría normas sociales encaminadas a la sostenibilidad ecológica vendría dada no tanto por la conformación de mayorías estables impulsoras de virtudes ecológicas (susceptibles siempre de oprimir a una minoría, sea del signo que fuere) como por la reinterpretación de los *derechos inalienables* de los individuos recogidos en las cartas constitucionales, entre los que habrían de incluirse derechos ambientales. De hecho, a mi juicio, la incisiva crítica del sistema de necesidades vigente en los sistemas capitalistas realizada por Sempere revela un hecho fundamental para el liberalismo ético y político que inspira los regímenes de democracia liberal: a saber, que lo que está en juego con la cuestión ecológica es la *dignidad* de los individuos (presentes y futuros) y con ella, claro está, sus derechos y libertades. Pero si ésta fuera la noción de socialismo que maneja Sempere, parece evidente que el término no sería el más apropiado para referirse al sistema político resultante.

Quedaría aún por debatir cuáles serían los cauces institucionales para arribar al «socialismo de la suficiencia». Sempere ofrece una clasificación de las formas de intervención institucional para regular las necesidades¹⁸ entre las que incluye el racionamiento, los controles administrativos, el Estado de Bienestar, las políticas de demanda o el apoyo al consumo responsable (por ejemplo, incentivando el comercio justo). Para un liberalismo económico dogmático todas ellas serían formas intolerables de intromisión estatal que ahogan la libertad y conducen al totalitarismo. Sin embargo, los regímenes de democracia liberal que no ignoren la gravedad de la crisis ecológica están obligados a impulsar algunas de esas formas de intervención económica con el fin de trabajar por el reconocimiento universal de la dignidad de los individuos. Sim-

plemente, no tienen otra opción, puesto que lo contrario, es decir, la ausencia de límites al consumo y de controles en la producción, lejos de favorecer la dignidad del individuo y la propia neutralidad entre las diferentes concepciones del bien que éste pueda abrazar, espolea la degradación del medio e impone veladamente un determinado estilo de vida (el propio del consumidor insatisfecho) en detrimento de otros. Como acertadamente ha señalado Brian Barry, la posibilidad de elegir depende siempre de «lo que esté disponible» y el sistema económico vigente cercena paulatinamente el número de alternativas de elección.¹⁹ Pero, al mismo tiempo, no todas esas formas de intervención ofrecerían resultados idóneos desde un punto de vista ecológico y es preciso concretar qué clase de controles o políticas resultarían más acordes con los objetivos de una política verde.

En definitiva, el análisis del fenómeno consumista realizado por Sempere es imprescindible para la edificación de una teoría política verde pero sus propuestas de transformación política están aquejadas de cierta indefinición. Concretamente, su alternativa ecosocialista descansa excesivamente en el presupuesto de una metamorfosis moral fruto de un cambio de conciencia que en ocasiones recuerda a concepciones esencialistas del pensamiento ecológico. Este exceso de confianza en la remoralización de la política tiene inconvenientes que no son tenidos en cuenta suficientemente. Sempere está en lo cierto cuando afirma que el consumo posee una dimensión política, pero no desarrolla una reflexión sobre esa dimensión sino que parece dejar todo el peso a la conversión ética en la esfera del consumo privado para posteriormente transitar hacia un modelo deliberativo de democracia que legitimará una planificación económica orientada a la austeridad. A mi entender, resulta indudable que en un futuro próximo la creación de una sociedad sos-

tenible dependerá en gran medida del lugar que ocupen los expertos «planificadores» de la sociedad sostenible en ese modelo deliberativo. Es innegable que, a día de hoy, el arraigo y la desmesurada expansión de la «mentalidad empresarial» tiene mucho que ver con la enorme influencia que ejerce la ciencia económica ortodoxa en las instituciones, por lo que es erróneo sostener, como hacen muchos liberales, que las sociedades capitalistas contemporáneas no son sociedades *planificadas* por parte de «expertos»: lo que sucede es que están planificadas *para* servir al sistema de mercado y éste ha sido rodeado por parte de los economistas liberales de un aura de espontaneidad e impersonalidad que no le corresponde. Por ello, el debate sobre la planificación económica debe recuperarse en un nuevo contexto y en términos menos maniqueos y excluyentes de los empleados tradicionalmente. Así pues, si los enfoques transdisciplinares del metabolismo socrionatural adquieren paulatinamente capacidad de influencia política, desplazando las angostas visiones establecidas por la ciencia económica convencional, podremos asistir en los próximos años a una progresiva transformación social de largo alcance, aunque orquestada, hasta cierto punto, «desde arriba». Debido a ello hay que poner especial cuidado, ya que sustituir un régimen oligárquico (el pseudoliberal que rige el capitalismo contemporáneo) por una sociedad tecnocrática sostenible que ejerza fuertes presiones sobre los individuos para conformarse a una identidad comunitaria definida por virtudes ecológicas, puede acarrear graves consecuencias en el plano moral y político que el pensamiento verde no debería tomar a la ligera. Ahí es donde la política ecológica puede enredarse peligrosamente. Hay que admitir que el ecologismo vive una incómoda relación con los procedimientos democráticos, en la medida en que una decisión basada sólo en la conformación de mayorías puede legitimar